

DAVID VS. GOLIATH: LA BATALLA POR EL CONTROL CONSTITUCIONAL ENTRE ÓRGANOS JUDICIALES Y AUTÓNOMOS. EL CASO DEL IEC

La protección de la Constitución a través de mecanismos de control por parte de las autoridades es un tema inacabado en el desarrollo jurídico nacional. Hasta el momento el criterio sobre quiénes están facultados para realizar el control constitucional parece estar monopolizado por los órganos jurisdiccionales, dejando al resto de las autoridades únicamente la facultad de aplicar un control de legalidad, no obstante la existencia de criterios de órganos internacionales que les reconocen la posibilidad de aplicación de un control de convencionalidad.

A partir de un estudio de caso en que desde el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se resolvió a favor de la aplicación de la norma más favorable a un partido político local y que generó una divergencia de criterios con el Tribunal Electoral local, el cual sería resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en términos similares a los planteados en primera instancia por el IEC, la propuesta que se realiza en este trabajo es discutir si las autoridades electorales, en tanto órganos constitucionales autónomos, pueden y deben aplicar un control de regularidad normativa, dentro del ámbito de sus competencias.

Lo que resulta claro, desde una posición de garantismo constitucional, es la necesidad de asumir un diálogo serio en torno a las atribuciones de los órganos autónomos como garantes de los mandatos constitucionales, particularmente relativo a su legitimación para inaplicar normas jurídicas que violenten el máximo ordenamiento jurídico, como sí lo pueden hacer con los tratados internacionales. Lo anterior teniendo en cuenta la naturaleza propia de los órganos autónomos como lo son los institutos electorales, los cuales se diferencian de manera clara de las meras autoridades administrativas que guardan un vínculo orgánico con el poder ejecutivo y la administración pública.